



El Quetzal

Una publicación trimestral

Numero 10

GHRC

Junio/Septiembre 2011

Polochic: su pasado, presente y futuro

“Fuimos en busca de soluciones, y solo encontramos dolor.”
- Sobreviviente de la masacre de Panzós -

Las comunidades maya q'eqchi'es del Valle de Polochic en Guatemala han sufrido una larga historia de amenazas, desplazamiento, violencia brutal y extrema pobreza. Después de una serie de desalojos violentos en marzo de 2011, más de 700 familias solo tratan de sobrevivir.

El golpe de estado respaldado por la CIA en 1954, puso fin a esfuerzos prometedores de reforma agraria en Guatemala, ya que afectaban los intereses económicos de empresas estadounidenses que operaban en el país. Bajo los gobiernos militares que rigieron en Guatemala por tres décadas después del golpe, familias pudientes (tanto nacionales como extranjeras) adquirieron título “legal” de las tierras del Valle de Polochic por medio de fraude, confiscación, intimidación y violencia.

La población maya q'eqchi' fue desplazada y a menudo obligada a trabajar por un misero salario en grandes plantaciones. Las tensiones entre los terratenientes, muchos de ellos de ascendencia alemana, y la población indígena local se incrementaba mientras que las comunidades luchaban por obtener el reconocimiento legal de su derecho histórico de la tierra.

El 27 de mayo de 1978, campesinos de San Vicente, Panzós, fueron a sembrar maíz a



La vida de cientos de indígenas, mujeres y niños están en riesgo hoy en día en el Valle del Polochic.

las orillas del río Polochic. Sus intensiones fueron interrumpidas por los hijos de uno de los terratenientes, acompañados por tropas del ejército, quienes los amenazaron y les exigieron que desistieran de la demanda por una reforma agraria. Dos días después, centenares de hombres, mujeres y niños de distintas comunidades se reunieron en el parque central de Panzós para dialogar con el alcalde Walter Overdick García. Ellos buscaban una solución al problema de la tierra y un alto a las constantes amenazas e intimidaciones. En lugar de un dialogo, fueron recibidos a balazos. Los soldados, quienes les esperaban en los techos de los edificios que rodean la plaza,

Continúa en la página 2

Pérez Molina y Baldizón competirán para la presidencia en la segunda vuelta electoral

Los candidatos presidenciales Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón tuvieron los más altos porcentajes de votos en las elecciones pasadas el 11 de septiembre. Ahora ambos compiten en la segunda vuelta electoral el próximo 6 de noviembre.

Las elecciones concluyeron una larga e intensa temporada de campañas marcada por batallas en los tribunales, violencia e intimidación pre-electoral. Las elecciones trajeron atención internacional a Guatemala debido a acusaciones que los candidatos tienen vínculos al crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos.

Pérez Molina, del Partido Patriota, recibió un 36% del voto. Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), quedó en segundo lugar con un 23% del voto.

Hasta hace poco, la oposición más fuerte a Pérez Molina era Sandra Torres, la ex-esposa del actual presidente Alvaro Colom. A pesar de su divorcio reciente de Colom, la Corte Suprema no permitió que apareciera en la lista electoral debido a una ley que prohíbe a miembros de la familia del presidente participar en las elecciones. El Frente Amplio, un grupo progresista y de izquierda con Rigoberta Menchú como su candidata, ganó un 3% del voto.

Los meses previos a las elecciones fueron marcados con altos índices de violencia

Continúa en la página 3

También en esta edición:

Declasificación de los archivos militares, p. 5
Massacre El Petén deja 27 muertos, p. 6

Delegación sobre los derechos de las mujeres, p. 13
Cambios emocionantes en GHRC, p.14

La misión de GHRC

Fundada en 1982, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington es una organización independiente y humanitaria sin fines de lucro. GHRC hace monitoreo, documenta y reporta sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, apoya a los sobrevivientes de abusos y trabaja para un cambio positivo y sistémico.

Junta Directiva

Kathy Ogle
Presidenta

Amy Kunz
Vice Presidenta

Joan Dawson
Secretaria

Janett Forte
Tesorero

Yolanda Alcorta

América Calderón

Christina del Castillo

John Leary

Jean-Marie Simon

Junta Consultiva

Kit Gage

Jennifer Harbury

Sr. Dianna Ortiz

Sr. Alice Zachmann

Personal

Kelsey Alford-Jones
Directora

Robert Mercatante
Director del Programa de Defensores de Derechos Humanos

Kathryn Johnson
Coordinadora de Incidencia y Gestión

Practicantes

Melissa Deal

Julia Sick

Desalojos en el valle de Polochic

abrieron fuego contra la multitud. Hombres, mujeres y niños fueron salvajemente masacrados, sus cuerpos fueron transportados hasta el cementerio local por el camión de basuras y arrojados a una fosa común como si fueran desperdicios. Otros murieron a consecuencia de sus heridas mientras huían de la masacre. Se estima que más de 100 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas.

Recientemente, el ex alcalde Walter Overdick García hizo una declaración sorprendente durante su testimonio en una audiencia en junio de este año. Públicamente y dando nombre, el afirmó que cuatro terratenientes de la región, junto con funcionarios militares de alto rango, coordinaron con anterioridad la represión violenta de la manifestación campesina.

En el informe de la comisión de la verdad titulado “Memoria del Silencio”, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) caracteriza el caso de Panzós como un claro ejemplo de la incapacidad del Estado para proteger los derechos territoriales históricos de las comunidades q’eqchi’es. El caso pone en evidencia cómo los terratenientes utilizan al Estado para resolver las disputas de tierras a su favor, hasta el punto de utilizar la violencia extrema en contra de campesinos. Asimismo, demuestra claramente la voluntad de la élite de involucrar al ejército en disputas agrarias. Lamentablemente, poco ha cambiado durante los 33 años desde la masacre de Panzós.

En el 2006, Carlos Widmann, cuñado del entonces presidente Oscar Berger, logró obtener préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por \$31 millones de dólares para mover su producción de caña de azúcar, Ingenio Guadalupe, de la costa sur al Valle de Polochic. La empresa, con el nuevo nombre de Chabil Utzaj, fracasó y las tierras fueron abandonadas. Las comunidades q’eqchi’es que fueron desplazadas regresaron y empezaron a cultivar para su propia subsistencia. En el 2010, los periódicos informaron que las tierras y el equipo de Chabil Utzaj serían subastados por un banco guatemalteco.

Sin embargo, en marzo de 2011 se anunció que el Grupo Pellas de Nicaragua rescató la empresa con una inversión de más de \$20 millones de dólares, bajo el nombre de “Guatemala Sugar State Corporation”. La familia Pellas, quien produce el ron Flor de Caña, es una de las familias económicamente más poderosa de Nicaragua. Administran un vasto imperio que incluye un banco, un hospital, concesionarios de automóviles, compañías de seguros, de distribución

de licores, de comunicación y muchos otros negocios en toda la región. Es uno de los mayores exportadores de etanol derivado de la caña de azúcar de Centroamérica, y se han expandido al cultivo de palma africana para la producción de aceite de palma y biocombustible.

Con Chabil Utzaj de vuelta a sus operaciones, la tierra tenía que ser despejada, lo cual significaba desalojar a los campesinos maya q’eqchi’es que habían sembrado sus cultivos en las tierras abandonadas.

El 14 de marzo, mientras ciertos funcionarios del gobierno guatemalteco se reunían con la delegación de las comunidades de Polochic para negociar una solución a la urgente necesidad de las tierras, otros funcionarios gubernamentales preparaban la logística para expulsar a la fuerza a estas mismas comunidades. Sería el desalojo más grande en la historia reciente de Guatemala.

Al siguiente día, a primeras horas de la madrugada, cientos de soldados, policías nacionales y guardias de seguridad privada contratados por Chabil Utzaj se congregaron en el Valle de Polochic. Bajo la dirección de Carlos Widmann, se comenzó el violento desalojo de hombres, mujeres y niños de sus hogares. Un campesino, Antonio Beb Ac, recibió una herida mortal en la cabeza. Otros resultaron heridos o se enfermaron debido a la inhalación de gases lacrimógenos.

Las familias suplicaron en vano a las fuerzas gubernamentales y paramilitares que no destruyeran los cultivos que ellos habían sembrado. Con una brutalidad que aludía a las tácticas de tierra arrasada utilizadas por el ejército durante el conflicto interno, los hogares de las familias indígenas fueron quemados y sus cultivos destruidos, dejando a miles sin comida ni refugio.

Dos días después, el gobierno del presidente Álvaro Colom publicó un comunicado oficial titulado: “Es deber del gobierno de la República preservar la gobernabilidad y el estado de derecho”. El documento afirma que el gobierno tiene la “obligación legal y moral de detener esta ola creciente de acciones ilegales”. Desafortunadamente, los “actos ilícitos” a los cuales se hace referencia no son los desalojos violentos ni el asesinato de campesinos, sino más bien las protestas pacíficas por la violación de los derechos humanos por organizaciones de movimientos sociales. El gobierno amenazó el “inmediato cumplimiento de todas las órdenes de desalojo” y que “se congelará todo espacio de diálogo” con organizaciones campesinas.

Elecciones van a segunda vuelta

De la página 1

política, con al menos 35 asesinatos de activistas y candidatos para alcalde y diputado. Muchos expresaron su preocupación de violencia el día de las elecciones, así como el acceso a las urnas y complicaciones debido a los múltiples sistemas de identificación.

Mientras el día transcurría con calma, observadores electorales, quienes sumaron más de 10,000 personas, reportaron actos de intimidación, compra de votos y otras anomalías. Una gran cantidad de quejas fueron registradas en los departamentos de Guatemala, El Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos.

Foto: susan@infobancom.com www.dhni.org



Manuel Baldizón, izquierda, y Pérez Molina

En Chimaltenango, las instrucciones monolingües en español en las papeletas crearon dificultades para hablantes del idioma K'aqchikel, muchos de los cuales son analphabetos. El Tribunal Supremo Electoral fue criticado por largos retrasos en publicar los resultados de las elecciones locales.

En general, las complicaciones no disuadieron a los ciudadanos de participar en las elecciones. Un estimado de un 66% de la población salió a votar, con gran participación de jóvenes y mujeres.

La seguridad ciudadana se ha vuelto uno de los temas principales de las campañas presidenciales, puesto que los guatemaltecos enfrentan un incremento en los niveles de violencia debido a las maras y el crimen organizado. Tanto Pérez Molina como Baldizón ha prometido contrarrestar el crimen a través de mayor presencia policial y militar.

Sin embargo, para los guatemaltecos ninguno de los candidatos inspira confianza.

Ambos han discutido la concesión de un mayor número de licencias de exploración y explotación minera—lo que es en la actualidad un tema controversial al que se oponen comunidades indígenas y activistas del medio ambiente en todo el país. Los temas de justicia, transparencia y derecho indígena

na han sido altamente ignorados durante sus campañas. De hecho, ambos han tenido que confrontar acusaciones de involucramiento en abusos de derechos humanos y crimen organizado.

Pérez Molina tiene una larga historia de participación en las fuerzas armadas, y fue quien supervisó la política de tierra arrasada en la región Ixil a principio de la década de los 80s. Si ganara, sería el primer oficial militar en ser presidente desde 1986. En entrevistas recientes, Pérez Molina negó que actos de genocidio ocurrieran en contra del pueblo maya durante el conflicto armado, una señal preocupante para las comunidades indígenas y los casos de derechos humanos actualmente en las cortes guatemaltecas. Defensores de derechos humanos al nivel internacional han expresado su preocupación por el impacto que su presidencia tendría sobre la justicia y responsabilidad por violaciones a derechos humanos (ver Pág. 4).

Baldizón ha sido identificado como el empresario más poderoso del Petén. De acuerdo con fuentes mediáticas, es dueño de hoteles, restaurantes, servicios de transporte aéreo y sobre tierra, centros comerciales y medios de comunicación, y le han acusado de tener fuertes vínculos al crimen organizado. Actualmente hay múltiples denuncias registradas en su contra en las cortes por apropiación de tierra públicas. Es, además, un fuerte promotor de la pena de muerte e incluso ha hablado de ejecuciones públicas—una idea especialmente peligrosa en el contexto de la corrupción policial y judicial en Guatemala.

Ambos candidatos han sido acusados por un grupo de monitoreo electoral, Mirador Electoral, de gastar mucho más en sus campañas del límite legal. Algunos han sugerido que solo el crimen organizado sería capaz de proveer esa cantidad de dinero para apoyar a un candidato.

Mientras la batalla presidencial recibió la mayor atención mediática, los resultados de las elecciones al congreso y a alcaldías tendrán fuertes implicaciones para los años que vienen. El Partido Patriota y la coalición Unidad Nacional de la Esperanza



Foto: Rob Mercatante

Una mujer indígena vota en la ciudad de Guatemala.

(UNE)-Gran Alianza Nacional (GANA) obtuvieron una gran cantidad de puestos en el congreso. El Partido Patriota también ganó una gran cantidad de puestos local. Pérez Molina y Baldizón están trabajando ahora para formar alianzas con los partidos que no ganaron y otros grupos de interés para así obtener el 50% necesario en noviembre. La mayoría de los partidos, incluyendo UNE-GANA, se han unido con Baldizón, quien además recibió el apoyo de aproximadamente 500,000 ex Patrulleros de Autodefensa Civil.

Mientras Guatemala se prepara para otros dos meses de campaña electoral, progresistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos ven presagios de un retorno a la Guatemala de la década de los 80s, así como un incremento en la represión, criminalización de movimientos sociales y un campo de acción libre para la élite gobernante de la nación.

Estadísticas de las elecciones

Partidos registrados: 27

Los votantes registrados: 7.340.841, (con una población de 14,4 millones de personas)

Resultados de la carrera presidencial:

- Otto Pérez Molina, Partido Patriota (PP)—36%
- Manuel Baldizón, Libertad Democrática Renovada (Líder)—23%
- Eduardo Suger, Compromiso, Renovación y Orden (Creo)—16%
- Rigoberta Menchú, Winaq/Frente Amplio—3.27%
- Juan Gutiérrez, PAN—2.76%
- Patricia de Arzú, Partido Unionista (PU)—2.17%
- Alejandro Giammatei, CASA—1.0%
- Adela Torrebiarte, ADN—0.43%

Organizaciones exigen investigación de los relacionados con tortura y crímenes de guerra

El derecho de la verdad y la justicia no desaparece durante la temporada electoral. Mientras las elecciones del 11 de septiembre se acercan, organizaciones guatemaltecas han seguido impulsando los casos de masacres y genocidio del conflicto interno, y las organizaciones internacionales han continuado su incidencia en los EE.UU. y la ONU para que se investigue los alegatos sobre la participación de oficiales militares en crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha articulado su propia política de prevención de atrocidades masivas, la cual incluye la denegación de entrada a los EE.UU. para individuos quienes han participado en tales actos.

El candidato presidencial Otto Pérez Molina es alguien que ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Teniendo en cuenta las débiles instituciones de Guatemala y la fuerte corrupción e impunidad, la posible presidencia de Pérez Molina, un general retirado, ha levantado muchas preocupaciones tanto en Guatemala como en la comunidad internacional. Pérez Molina, quien fue entrenado como kaibil, está implicado en numerosas violaciones de derechos humanos, tanto cuando supervisaba la región Quiché durante el genocidio patrocinado por el estado, como cuando trabajaba como jefe de inteligencia militar guatemalteco. Un caso fue presentado en su contra en los tribunales de Guatemala en marzo de este año por su presunto involucramiento en la desaparición forzada y la tortura de Everardo Bámaca. Históricamente, Pérez Molina ha tenido estrechas relaciones con los EE.UU. Se graduó de la Escuela de las Américas, y según alegó el periodista Allan Nairn, él estaba en la nómina de la CIA a mediados de la década de los 90s.

Cuando GHRC y otros grupos se enteraron de la posible visita de Pérez Molina a Washington, DC en mayo, organizaron una manifestación grande frente al Departamento de Estado, instando a que se niegue las visas a los criminales de guerra. Más de 70 activistas se reunieron el 16 de mayo con pancartas con el mensaje "No a Visas para los torturadores, los autores de genocidio o criminales de guerra", y mostraron una pancarta de treinta pies de largo con fotos de exhumaciones de fosas comunes y los familiares de las víctimas del genocidio.

En julio, GHRC, junto con Annie Bird de Derechos en Acción y la abogada Jennifer

Harbury, dieron seguimiento con una carta al Relator Especial sobre la Tortura, de las Naciones Unidas, pidiendo una investigación sobre la participación de Pérez Molina en actos de tortura y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno en Guatemala.

En concreto, la carta pidió a la ONU investigar el papel de Pérez Molina en "la utilización sistemática de la tortura en el Triángulo Ixil y otras áreas en la década de 1980, así como la tortura sistemática de todos los prisioneros de guerra, especialmente como Director Nacional de la división de inteligencia en 1992". La carta aporta prueba contundente para respaldar la solicitud, tal como documentos desclasificados del Departamento de Estado.

El trabajo de GHRC para crear conciencia acerca de los guatemaltecos que viajan a menudo a los EE.UU. que son acusados de crímenes de guerra se vio reforzado por el reciente comunicado de la administración Obama, la "Directiva Presidencial sobre las Atrocidades Masivas", que reitera que es de interés de los EE.UU. denegar la entrada a aquellos que han participado en extensas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En su proclamación del 4 de agosto, Obama declaró: "El respeto universal para los derechos humanos y el derecho humanitario y la prevención de atrocidades a nivel internacional promueve los valores estadounidenses y los intereses fundamentales de los EE.UU. en ayudar a asegurar la paz, disuadir la agresión, promo-



El candidato presidencial Otto Pérez Molina frente a su símbolo de la campaña "mano dura"

(Foto: www.guatemalhostal.com)

ver el estado de derecho, luchar contra la delincuencia y la corrupción, fortalecer las democracias y prevenir las crisis humanitarias en todo el mundo".

En un memorándum adjunto, el Presidente Obama describió la creación de un Consejo Interinstitucional de Prevención de Atrocidades y una Revisión Correspondiente Interinstitucional. El memorándum comienza: "La prevención de las atrocidades masivas y el genocidio es un interés esencial de seguridad nacional y una responsabilidad moral fundamental de los Estados Unidos".

El siguiente paso será asegurar que el gobierno de EE.UU. tome en serio este compromiso cuando se evalúe la forma de relacionarse con una posible administración de Pérez Molina.

Ver una copia de la carta y más sobre nuestra campaña en www.ghrc-usa.org.



Licenciada Jennifer Harbury habla a más de 70 activistas que se reunieron fuera del Departamento del Estado de EE.UU. para exigir que los EE.UU. niega visas a los criminales de guerra.

La controversia continúa sobre la desclasificación de archivos militares de Guatemala

Por Kelsey Alford-Jones

El primer archivo público del Ministerio de Defensa de Guatemala se encuentra abierto, pero vacío; el rostro de un controvertido proceso de desclasificación que se concluyó el 20 de junio del 2011 cuando el archivo fue inaugurado por la Comisión Presidencial para la Desclasificación de los Archivos Militares.

La Comisión, encargada de analizar y organizar los archivos militares del conflicto armado, reunió documentos de las bases militares y centros de formación en todo el país. Ahora, después de años de negar el acceso a los archivos militares, el Ministerio de Defensa promociona la desclasificación de sus documentos secretos de la guerra y ofrece la apertura del archivo como un paso adelante importante en la transparencia y el acceso a la información. La colección incluye 11.698 documentos que son públicos y 589 que están parcialmente clasificados. Cincuenta y cinco más se mantiene en reserva, incluidos los documentos claves del conflicto.

Ubicado de forma protegida dentro del complejo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el archivo no va a atraer a muchos ciudadanos guatemaltecos - mucho menos los sobrevivientes de abusos militares. El proceso para solicitar una visita, o copias de los documentos, no es fácil. Después de haber sido abierto por casi tres meses, un total de cuatro personas han visitado. Pocos guatemaltecos saben que el archivo existe.

Hasta ahora, el archivo ha dado más preguntas que las que ha contestado. Muchos tienen dudas sobre la validez y el contenido del archivo, debido al número reducido de documentos, el hecho de que documentos claves se mantienen en reserva y a la falta de accesibilidad. ¿Fueron todos los documentos relacionados a las operaciones militares durante el conflicto realmente revisados por la Comisión? ¿Por qué algunos documentos claves siguen clasificados cuando se han vinculado a violaciones de derechos humanos y deben, por ley, ser públicos?

En agosto visité el archivo para ver por mí misma lo que contenía y que tan accesibles eran los documentos. Si el contenido del archivo, después de todo, no cumplió con el mandato de la Comisión, sería un momento para aumentar la presión y no de celebración.

Un proceso largo y contencioso

Durante años, los guatemaltecos han pedido

acceso a documentos militares como parte de su derecho a la verdad y han luchado para descubrir las políticas del ejército que llevaron a las atrocidades del conflicto armado. Sin embargo, los documentos militares permanecieron reservados e inalcanzables, a pesar de repetidas peticiones de organizaciones de la sociedad civil. La petición de entrega de cuatro planes militares - *Plan Sofía*, *Plan Victoria 82*, *Plan Firmeza 83* y *Operación Ixil* - se convirtió en el centro de la lucha cuando se les solicitó para un caso en contra de los autores intelectuales del genocidio, incluyendo el general Efraín Ríos Montt y otros altos funcionarios militares y policiales.

Ríos Montt, el entonces presidente del Congreso de Guatemala, alegó que la desclasificación de los documentos

pondría en peligro la seguridad nacional, pero las cortes no estuvieron de acuerdo. En julio de 2007, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal ordenó la liberación de los documentos, y la decisión fue confirmada por la Corte Constitucional en marzo del año siguiente.

La aprobación de la Ley de Libre Acceso a la Información en septiembre de 2008 (vigente en marzo de 2009) ofreció otra herramienta más para facilitar el acceso público a los registros - en particular el artículo 24 de la ley, que dicta que información relacionada con violaciones de derechos humanos o atrocidades "en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada".

El presidente Álvaro Colom, mientras tanto, también había ordenado la desclasificación de los documentos militares del conflicto interno. El 25 de febrero de 2008, el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, Colom proclamó: "les puedo asegurar que vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército".

El presidente Colom, a principios de marzo, designó a su Comisión de Desclasificación, compuesto de siete miembros con antecedentes tanto militar como civil, que irían a visitar las bases militares de Guatemala, solicitar los archivos reservados de 1954-1996, organizarlos y decidir a nivel interno el proceso para su desclasificación. La Comisión tuvo un plazo de diez meses para publicar sus resultados, pero Colom dio prórroga de seis meses, que llevó a la apertura oficial el 20 de junio de este año.

Organizaciones guatemaltecas e internacio-

nales, inmediatamente tenían serias dudas sobre el proceso de recolección y análisis de los documentos. En una carta al presidente Colom el 19 de julio, GHRC y otros cuestionaron la transparencia del proceso, los criterios para la mantener en reserva los 55 documentos, la falta de un índice para la colección y el supuesto acceso público a los archivos.

Desafortunadamente, la pompa y circunstancia del nuevo archivo parece enfocada solamente en aplacar al gobierno de EE.UU. Apenas un mes después de la apertura del

"Les puedo asegurar que vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército".

- Presidente Colom

archivo, la Comisión de siete miembros viajó a Washington, DC, acompañada por un militar estadounidense, para compartir información sobre el proceso de desclasificación con los representantes de los Departamentos de Estado y Defensa, así como las oficinas claves del Congreso. Las esperanzas de un aumento en la cooperación militar a Guatemala, es claro, siguen vinculadas a sus muestras de buena voluntad y transparencia durante el proceso de desclasificación.

La Comisión también se reunió con organizaciones de derechos humanos, incluida la GHRC, para explicar su proceso. Durante la reunión la Comisión nos aseguró que "había tenido acceso a todo el universo de documentos y sólo examinó los documentos secretos". El número muy reducido de documentos, nos dijeron, refleja el hecho de que la Comisión no recogió los registros "administrativos" - sólo planes de estrategia y de operaciones.

El General Morales, el coordinador de la Comisión, extendió una cordial invitación a visitar su nueva instalación, y pidió nuestro consejo en cómo crear conciencia del archivo. "Es muy bueno que ha venido hasta Washington", le comenté a un comisionado, "pero ¿han estado en Xela? ¿en Quiché? ¿o en Rabinal?" La respuesta del señor incómodo fue un simple "no".

Archivos importantes se mantienen en reserva

Durante mi visita a los archivos, encontré poco que apoyaba las afirmaciones de la Comisión. Yo fui recibida por el General Morales y acompañada a la pequeña sala de computación. Bajo la atenta mirada de un

Continúa en la página 12

Masacre en El Petén deja 27 muertos

Cuando la policía llegó al rancho de Los Cocos, en La Libertad, El Petén, se encontraron con una escena horrible. Veintisiete trabajadores agrícolas estaban muertos, sus cabezas tiradas en un campo cercano. Un mensaje escrito con su sangre fue dirigida al propietario de la hacienda: "¿Que ondas, Otto Salguero? Te voy a encontrar y así te voy a dejar igual. Attentamente, Z200".

La masacre tuvo lugar el 15 de mayo. Los sobrevivientes estiman que decenas de hombres armados asesinaron y decapitaron a las víctimas. Entre los muertos había dos mujeres y dos niños. Sólo tres personas sobrevivieron al ataque: un hombre, una mujer embarazada, y su hija. Los trabajadores eran inmigrantes de temporada de Izabal, que pasaron algunos meses del año trabajando en El Petén. No hay evidencia de que los trabajadores tenían alguna conexión con las redes criminales.

Según las autoridades guatemaltecas, Otto Salguero había robado un cargamento de 2,000 kilos de cocaína de los Zetas y estaba tratando de extorsionar a ellos para negociar su devolución. Los Zetas habían llegado a principios de mayo a la demanda de las drogas. El 10 de mayo, Salguero envió al marido de su sobrina, Luis Carlos Bardales Chacón, para hacer un pago, pero Chacón fue secuestrado y asesinado. Su familia recibió una llamada de rescate al día siguiente, y el 13 de mayo, el padre de Chacón y la esposa se fueron hacer un pago. Ambos fueron asesinados en el camino.

Salguero es propietario prominente de una finca que no tenía una historia oficial de participación en el narcotráfico. Sin embargo, los vecinos comentaron sobre sus turbios negocios - la contratación de jornaleros para producir queso, leche y alimento para el ganado de su finca en Petén, que cuando los investigadores llegaron a Los Cocos, no tenía una sola cabeza de ganado. Se encontraron que él también tiene varias fincas en lugares estratégicos, entre



(Foto: el-mexicano.com.mx)

27 campesinos asesinados en la masacre en El Petén: Los Zetas dejaron una amenaza de muerte escrito en su sangre.

ellos una cerca de la frontera con Honduras y otra cerca de México.

Tras el ataque, el presidente Álvaro Colom declaró el estado de sitio en el noroeste departamento de Petén durante 30 días y mandó policías y militares para patrullar la zona. En Santa Elena, la policía tuvo un enfrentamiento con tres presuntos miembros de los Zetas. Dos murieron en el tiroteo, y uno, Hugo Francisco Chávez Méndez, un ex sargento del ejército guatemalteco, fue arrestado. Dos días después, la policía también detuvo a Hugo Gómez Álvarez Vásquez en el vecino departamento de Alta Verapaz. Muchos, entre ellos el presidente Colom, han especulado con que la fuerza especial elite del ejército guatemalteco, los kaibiles, también participaron en la masacre.

Este espectáculo horripilante del poder es la evidencia más reciente de un mayor control de los Zetas en grandes áreas del territorio guatemalteco. Cobán, Alta Verapaz se ha convertido en su base de operaciones, sino que también controlan las rutas de tráfico extenso en Zacapa, Petén, así como los cruces fronterizos claves.

Guatemala es un lugar atractivo y estratégico para la expansión de los Zetas, ya que

proporciona acceso a los puertos del Atlántico y del Pacífico, proximidad a la frontera con México e instituciones débiles y fácilmente corruptibles.

Los Zetas, altamente militarizada y con amplias redes de inteligencia, contratar personal que la fuerza especial elite del ejército guatemalteco, los kaibiles, y se han infiltrado en muchas de las oficinas de Guatemala, el gobierno local y nacional. En algunas ciudades, los Zetas son conocidos por pagar sobornos jugosos a las autoridades locales.

El grupo tiene un arsenal de grado militar de AK-47, granadas y hasta helicópteros, y es conocido por sus tácticas de choque y pavor particularmente brutal. Su presencia en Guatemala ha llevado a un aumento en la violencia, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, y los conflictos entre las redes de la delincuencia local. Las empresas locales pagan las cuotas, y los que resisten son tratados sin piedad. Los Zetas también fueron responsables de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, México, en agosto de 2010, y más recientemente, el incendio en el Casino Royale en Monterrey donde se murieron 52.

Haz una pasantía o trabajo voluntario con GHRC

¿Te interesa involucrarte con la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala? Ya sea en nuestra oficina en DC o desde lejos, hay muchas oportunidades para ayudar. Estamos buscando traductores (en especial hablantes nativos de español), ayudantes para actividades administrativas, y activistas apasionadas que les gustaría ayudar a educar o recaudar fondos en su propia comunidad. También estamos aceptando aplicaciones para nuestros puestos de pasantía para primavera de 2012.

Ambientalista y defensor, Yuri Melini, recibe amenazas de muerte

En el mes de agosto recién pasado, Yuri Melini recibió amenazas de muerte por su trabajo en defensa de los derechos humanos, específicamente el derecho a un medio ambiente limpio y seguro. Melini es ambientalista, activista defensor de derechos humanos y director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). CALAS trabaja para proteger el medio ambiente, fortalecer la participación ciudadana y promover el respeto de los derechos indígenas en relación al medio ambiente.

El 29 de agosto, Melini recibió un mensaje que decía que dejara la vida en paz y si no, será "parte del ecocadena". Las amenazas están relacionadas al despido de Federico Guillermo Álvarez Mencilla, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Durante los meses previos a las amenazas, CALAS promovía una campaña contra la corrupción y contra la construcción de una planta de gas en Punta de Manabique, una reserva natural en el nordeste de Guatemala. Como parte de la campaña, CALAS puso una denuncia en la Corte de Constitucionalidad y cabildeó por la destitución de Mencilla, quien era

el encargado del área protegida.

La nota también fue enviada al consejero legal de CALAS, Rafael Maldonado, y contenía fotografías de 18 hombres y amenazó: "Metan preso a quien quieran y sigan haciendo el show que quieran..."



Yuri Melini, director de CALAS, sostiene un artículo acerca de los daños ambientales en áreas protegidas de Izabal

Nosotros empezaremos a ajustar nuestras cuentas después del 14-01-2012[el día que el nuevo presidente asume su cargo]... Sera problema de los que vienen y ustedes dejaran de estar haciendo escandalo".

Melini fue víctima de un ataque violento en 2008, cuando fue baleado cuatro veces. El ataque ocurrió después de que CALAS ganó un proceso legal en la Corte de Constitucionalidad para cambiar la Ley de Minería en Guatemala; es muy probable que la represalia haya venido por parte de intereses mineros. Afortunadamente, Yuri sobrevivió, y ha continuado su activismo para defender el medio ambiente y las áreas protegidas de Guatemala.

Ambientalistas y defensores de derechos humanos son blancos de ataques frecuentes en Guatemala por su trabajo. UDEFEGUA reportó 302 ataques contra defensores de derechos humanos en los primeros ocho meses de este año, un promedio de 1,4 ataques diarios. La gran mayoría de los ataques (82,9%) fueron contra campesinos, comunidades indígenas y ambientalistas. Defensores de derechos

humanos son víctimas de detenciones ilegales, persecución y el trato cruel e inhumano; 16 han sido asesinados. La mayoría de los ataques ocurrieron en el departamento de San Marcos, seguido por Alta Verapaz y Guatemala.

Héctor Mario López Fuentes y otras detenciones

General retirado del Ejército Héctor Mario López Fuentes, de 81 años, fue arrestado el 17 de junio por cargos de genocidio, desaparición forzada y otros crímenes contra la humanidad. López Fuentes es el funcionario de más alto rango que fue detenido por violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala.

López Fuentes fue el tercer funcionario de mayor rango durante el régimen de Ríos Montt, y como Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, era el segundo al mando de los militares. Él es acusado por la Fiscalía de "más de diez mil asesinatos, nueve mil personas desplazadas por la fuerza, y la violación de mujeres en la región Ixil Maya, crímenes que tuvieron lugar entre marzo de 1982 y octubre de 1983".

López Fuentes como "mano derecha" de Ríos Montt supervisó la implementación de las campañas militares del Plan Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, planes que se han mantenido en reserva por el ejército guatemalteco a pesar de las demandas en curso para su desclasificación. (Ver "La controversia continúa", página 5.)

Otros ex militares de menor rango también han sido arrestados recientemente por su presunta participación en violaciones de los



derechos humanos durante el mismo período. También, El coronel Héctor Bol de la Cruz, ex director de la Policía Nacional de 1983-85, fue acusado recientemente por su responsabilidad de mando en la desaparición forzada del estudiante y dirigente sindical Edgar Fernando García.

Fuentes López fue acusado formalmente el 20 de junio y se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Matamoros, en la ciudad de Guatemala, 12 años después de que el caso fuera presentado por primera vez a los tribunales.

Foto: "Se Busca por Genocidio- Héctor Mario López Fuentes: Capturado" (Graham Hunt)

Activismo una forma de vida para recipiente de beca de GHRC Adrian Ventura

Hoy en día es difícil encontrar historias de éxito sobre asuntos de derechos laborales y derechos de los inmigrantes. Sin embargo, Adrian Ventura, un líder comunitario y dirigente sindical en New Bedford, ha logrado su cuota. En los últimos seis años ha pedido cuentas a las empresas más grande de la ciudad con respecto a sus políticas laborales y anti discriminatorias--y se le han respondido.

Adrián, un indígena del Quiché, escapó de Guatemala para evitar persecución política. Él se encontró en New Bedford, MA, y a pesar de los muchos desafíos se estableció como uno de los organizadores más activos y enérgicos de la comunidad inmigrante. Es el director ejecutivo y cofundador del Centro Comunitario de Trabajadores (CCT), una organización que educa a los trabajadores inmigrantes sobre sus derechos, provee asistencia legal e interpretación para los que hablan K'iche', e incluso trabaja con la policía local para educarla sobre la población inmigrante de New Bedford.

New Bedford es una ciudad ubicada en la costa del sur de Massachusetts que tiene una larga y orgullosa historia como un centro de pesca y caza de ballenas y se promociona como el puerto pesquero comercial más grande de la nación. En la actualidad, la pesca comercial se celebra como una importante tradición cultural de la ciudad. Junto con la industria manufacturera, es lo que mantiene la actividad comercial en New Bedford.

Detrás del brillo del patrimonio económico de la ciudad, sin embargo, son las realidades de los hombres y las mujeres que procesan el pescado y trabajan en las fábricas. Al igual que en muchas partes del país, los trabajadores son inmigrantes, a menudo trabajando sin permiso legal. En New Bedford, son en gran parte maya K'iche' del altiplano de Guatemala.

Muchos llegan con casi nada, apenas hablando el español, mucho menos el inglés. Algunos eran campesinos que vienen buscando oportunidades económicas. Otros eran propietarios de pequeños negocios que vienen escapando de la violencia de las maras locales las cuotas semanales cobradas por las redes de crimen organizado. Algunos llegaron a New Bedford por-

que ya tenían familiares o amigos allí. Y hay otros todavía que vinieron porque oyeron que hay puestos de trabajo. Ahora se pasan trabajando muchas horas por poco dinero en las fábricas o procesando pescado.

"Llegan cien, se van diez," estima Adrián. "Ahora en especial por todos los problemas en Guatemala... y Otto Pérez Molina". agrega, refiriéndose al candidato presidencial y ex militar que dirigió los actos de genocidio en el departamento del Quiché.

New Bedford no es el ambiente más acogedor para la mano de obra indocumentada. La ciudad captó la atención nacional en 2007, cuando 300 agentes federales de inmigración detuvieron a 350 trabajadores de Michael Bianco Inc. Los detenidos eran en su mayoría guatemaltecos y habían estado trabajando en terribles condiciones de producción de bienes de cuero y mochilas militares. Muchos fueron deportados posterior a la redada. El propietario fue acusado de contratar a sabiendas a trabajadores indocumentados. La empresa había recibido más de \$100 millones en contratos del Departamento de Defensa en sólo cinco años.

La redada impulsó a Adrián a involucrarse más. En ese entonces trabajaba con la organización Maya K'iche y apoyó a los trabajadores indocumentados y a sus familias. "Allí nace la idea de ver cómo prevenir esto en otras fábricas." dice. "Los trabajadores eran fuertemente discriminados y explotados, y no había centros laborales para apoyarles".

El ayudó a fundar la CCT, que ahora ofrece talleres mensuales sobre los derechos laborales y colabora con una organización de justicia legal en casos de violaciones laborales. Cuando el CCT se entera de abuso o discriminación, la organización cuenta con una gran variedad de estrategias para apoyar a los trabajadores, así como el diálogo con el sector privado, la inci-

dencia con los legisladores, la acción directa y la educación pública. Su organización ha tenido un gran éxito en logrando justicia para las víctimas de violaciones laborales.

Su estrategia a menudo comienza con una carta a la empresa, solicitando una reunión. "Nos reunimos y discutimos los temas a través de un intérprete". dice, "La compañía cumple, porque no quieren que el alegato salga a los medios de comunicación".

Cuando 86 trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo en una planta procesadora de pescado justificado con el programa E-Verify, Adrián organizó una reunión con la empresa y la convenció de volver a contratar a los trabajadores. También aprovecharon la oportunidad para crear conciencia sobre las condiciones de trabajo. "Les pedimos que respetaran nuestros derechos, nuestro idioma y que capacitaran a sus empleados a hacer lo mismo".

Continúa en la página 9



"¿Cual direction para los Estados Unidos? Lider comunitaria Adrian Ventura participa en una manifestación en New Bedford, MA.

Adrian Ventura

De la página 8

En otro caso, se enteró de violaciones que ocurrían en una empresa que alquila tiendas y carpas industriales. La empresa no les pagaba las horas extras a los trabajadores y contrataba a menores de edad para trabajar hasta 80 horas por semana. "Cuando nos enteramos, se organizó una protesta en frente de la empresa hasta que decidieran pagar". Su organización también brindó ayuda a un grupo de mujeres K'iche's que eran víctimas de discriminación en una maquila. La comunidad inmigrante en New Bedford

“Los sin documentos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales”

no se ha librado de los efectos negativos del programa de Comunidades Seguras. En un caso, María, una mujer guatemalteca cuyo marido fue arrestado y deportado, estaba tan ansiosa que ella sufrió un aborto involuntario. Adrián y el CCT de nuevo tomaron acciones para organizar una respuesta de la comunidad. Buscaron apoyo psicológico para María y hablaron con las autoridades locales. "Hemos enviado cartas a los congresistas y nuestro representante dijo que va a firmar en contra [del programa]".

A través de su incidencia política y diálogo con la policía, Adrián ha contribuido a una disminución de la implementación del programa. En los últimos dos meses, sólo siete personas han sido detenidas bajo Comunidades Seguras.

A pesar de los retos de trabajar por los derechos laborales, él dice que la parte más difícil de su trabajo es educar a la gente sobre sus derechos y animarles a defenderse. Los desafíos no lo detendrán. "La vocación la traigo en la sangre", dice con orgullo. "Los sin documentos tenemos los mismos derechos", explica, y cita del libro sagrado de los Mayas, el Popol Vuh: "nadie se quede atrás, que todos caminemos juntos, hombres y mujeres, que todos somos iguales".

 El fondo "Voiceless Speak" ofrece becas pequeñas a guatemaltecos y guatemaltecas en los Estados Unidos gracias a un donante generoso. Visite nuestro sitio web para detalles.

Actualización de la Reforma Migratoria

Comunidades Seguras

El 18 de agosto, después de fuertes críticas por parte de grupos de defensores de los derechos de inmigrantes sobre el programa "Comunidades Seguras", el Presidente Obama anunció un cambio en la política de deportaciones. Comunidades Seguras es un programa en el que la policía local y estatal envía a Inmigración y Aduanas (ICE) las huellas dactilares de las personas detenidas. Muchas personas afirman que, en virtud de Comunidades Seguras, miles de personas que han sido deportados no representaban ninguna amenaza para los EE.UU. El cambio en la política supuestamente detendría las deportaciones de muchos estudiantes que podrían ser elegibles para la residencia permanente bajo el Acto "DREAM" y centralizar así los esfuerzos de EE.UU. en deportar a aquellos que realmente representen una amenaza para la "seguridad nacional o seguridad pública".

El Acto DREAM

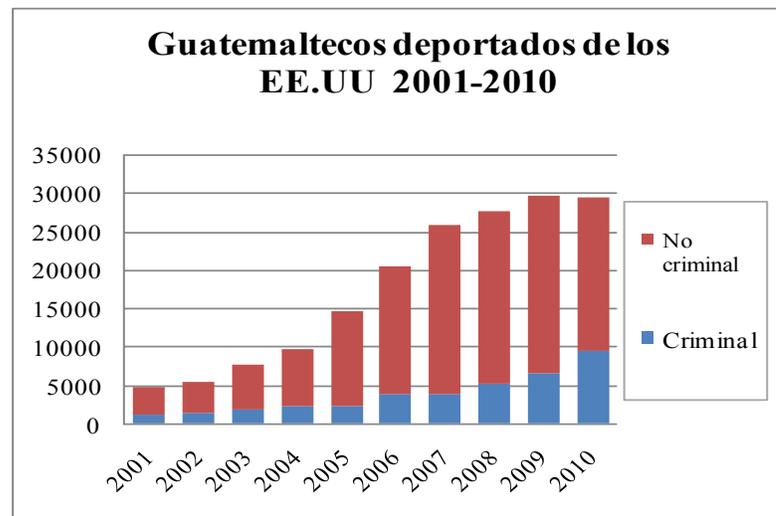
El Acto de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores de Edad (DREAM) calificaría a inmigrantes extranjeros para la residencia permanente si entraron al país antes de la edad de 16 años y asistan a la universidad o que se alistan en el ejército. Originalmente introducido el 1 de agosto del 2001, este proyecto de ley ya ha sido modificado y presentado varias veces ante la Cámara y el Senado. Más recientemente, el Acto DREAM fue aprobado en diciembre de 2010 por la Cámara de Representantes, pero fue bloqueado por una maniobra obstruccionista en el Senado. Sin embargo, muchos estudiantes valientes indocumentados y sus simpatizantes han seguido presionando para la aprobación de la ley, con el riesgo de ser detenidos y deportados.

E-Verify

E-Verify es un programa polémico en el cual los empleadores pueden verificar la elegibilidad legal de los empleados actuales o potenciales. Muchos han criticado el programa como inexacto y caro, y afirman que ha sido utilizado en contra de algunos empleados miembros de las minorías. Sin embargo, el proyecto de Ley de Verificación Legal de Empleo haría que el uso de E-Verify fuera obligatorio para todos los empleadores. Al momento de esta publicación, el Proyecto de Ley está siendo revisado por un comité de la Cámara de Representantes

El aumento de deportaciones

El presidente Obama ha sido el blanco de manifestaciones masivas en las últimas semanas por los activistas de derechos de los inmigrantes, que siguen presionando para la aprobación del Acto DREAM y en contra del programa "Comunidades Seguras", protestas impulsadas en gran parte por las deportaciones contantes. El número de guatemaltecos deportados de los EE.UU. ha aumentado cada año durante la última década. En el primer semestre del 2011, las autoridades de inmigración de EE.UU. habían deportado a 14,478 guatemaltecos, un aumento de un 11,54% respecto al mismo periodo del año 2010.



Fuente: Department of Homeland Security Yearbook of Immigration Statistics 2010

Desalojos en Polochic

De la Página 2

Los ataques no terminaron con los desalojos. El 21 de marzo, miembros de la comunidad de Canlún se hallaban cultivando la tierra que les pertenece a través de su cooperativa, cuando vieron tres tractores excavando en un campo cercano. Estaban acompañados por 18 guardias privados y el jefe de seguridad de la empresa azucarera Chabil Utzaj. Cuando los campesinos les preguntaron qué pasaba, les respondieron que los tractores estaban excavando sus tumbas. Inmediatamente, el jefe de seguridad les ordenó a los guardias que abrieran fuego. Oscar Reyes, un campesino de 34 años, fue asesinado. Otras tres personas recibieron heridas de bala.

Luego, el 13 de mayo, tres helicópteros privados sobrevolaron la comunidad de Aguacaliente. Utilizaron granadas para destruir los campos de maíz que habían logrado sobrevivir a los desalojos y para intimidar a las familias que estaban tratando de cosechar el maíz.

El 4 de junio, María Margarita Che Chub, una líder de la comunidad de Paraná de 37 años de edad, fue asesinada a tiros por hombres fuertemente armados que llegaron a su casa en motocicleta. Fue asesinada en presencia de su dos hijos pequeños.

A la media noche del 10 de agosto, 22 familias fueron atacadas por fuerzas paramilitares. Los hombres armados, sus rostros cubiertos, comenzaron a disparar y a exigir que los miembros de la comunidad abandonaran las tierras que le pertenecen a Chabil Utzaj. Los frágiles hogares de las familias fueron destruidos y sus pertenencias, como su ropa y el maíz cosechado, fueron quemados. Martín Pec May recibió un disparo en el abdomen, mientras que Carlos Ical fue herido en la pierna. Una niña de 8 años de edad resultó herida cuando una bala le rozó la pierna.

Un “nuevo” Chabil Utzaj

En junio, una pieza publicitaria disfrazado como noticia de prensa, titulado “Grupo Pellas compra ingenio y creará 2 mil empleos” fue publicada en el periódico Siglo XXI. Señaló que el Grupo Pellas había asumido el “control total” de la empresa y que se estaba creando un “nuevo Chabil Utzaj”. Miguel Maldonado, el nuevo director general prometió que, además de crear empleos, la empresa iba a “llevar ayuda como apoyar escuelas, quizá un hospitalito o respaldar a los centros de salud actuales; estamos pensando llegar no con las manos vacías, sino ayudar a la gente, pero para eso tenemos que tener productividad”.



GHRC, junto con otros peticionarios en el proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reúnen con miembros de las comunidades desplazadas en el Valle de Polochic.

La condescendiente oferta de “ayudar a la gente” no será suficiente para crear cambios a largo plazo para las comunidades del Valle de Polochic. La mitad de los nuevos empleos propuestos no son fijos y solo ofrecidos durante la “temporada alta”. Al proponer el remplazo de la agricultura de subsistencia por la producción de azúcar a gran escala, el “nuevo” Chabil Utzaj está creando una dependencia financiera y alimentaria, la cual ocasiona la ruptura con las existentes estructuras comunitarias, la usurpación del papel del Estado en la prestación de servicios de salud y educación, y la total indiferencia a la importancia fundamental del maíz en la cultura indígena. El “nuevo” Chabil Utzaj

refleja una antigua mentalidad feudal.

El trabajo de GHRC

Inmediatamente después de los desalojos, GHRC unió fuerzas con una coalición de organizaciones guatemaltecas e internacionales en la presentación de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos para la aprobación de medidas cautelares para las comunidades. Las medidas cautelares piden que un Estado tome medidas concretas para “prevenir daños irreparables” a personas, organizaciones o comunidades que se encuentran en riesgo.

El 20 de junio, la CIDH otorgo medidas cautelares a favor de 14 comunidades del Polochic que fueron desalojadas a la fuerza. Dice en parte:

“Entre 700 y 800 familias de la comunidad se encuentran viviendo en condiciones precarias, sin acceso a alimentos y agua, y sin que agencias estatales les hubieren proporcionado albergue ni soluciones nutricionales [...] La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad

física de los miembros de las 14 comunidades indígenas Q’echi; adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, a los miembros de las 14 comunidades que se encuentran desplazadas; y concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes”.

GHRC ha estado trabajando incesantemente con otras organizaciones de derechos humanos, campesinas e indígenas para asegurar que las medidas sean adoptadas por el gobierno guatemalteco. Constantemente, nos hemos reunido con las comunidades en un esfuerzo para definir sus necesidades más urgentes en las áreas de seguridad, nutri-

Continúa en la página 11

Desalojos en Polochic

De la página 10

ción, salud y vivienda. También hemos mantenido la presión sobre el gobierno para poder llegar aun consenso con los beneficiarios sobre la mejor manera de implementar las medidas.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido insatisfactoria. No fue hasta el 2 de septiembre que el gobierno por fin dio pasos



(Foto: Rob Mercatante)

Munición y otros objetos recuperados en Paraná después de un ataque de las fuerzas paramilitares.

concretos hacia el cumplimiento de las medidas cautelares en una reunión entre la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y representantes de las comunidades.

Un avance importante fue el de llevar a cabo en las comunidades un censo de salud y nutrición para determinar cómo el gobierno puede brindar mejor atención de salud inmediata y ayuda alimentaria a las familias. En cuanto a la seguridad, ha habido una rotación de oficiales de policía en la zona y se ha comenzado una investigación de la seguridad privada de la empresa Chabil Utzaj.

Sin embargo, al final siempre se vuelve al problema de fondo: el de la tierra. El gobierno ha declarado repetidas veces que el tema del acceso y propiedad de la tierra no va a ser objeto de discusión. No obstante, los campesinos dicen que es absurdo hablar de sus necesidades alimenticias y de vivienda sin tomar en cuenta la necesidad de tierra. ¿“Cómo puedo alimentar a mi familia si no puedo trabajar la tierra? Yo no soy un mendigo y no quiero limosna. Soy agricultor y quiero cultivar”, exclamó un campesino durante la reunión. Otro se preguntaba: “El gobierno habla de vivienda, pero ¿dónde

van a construir mi casa?, ¿en el aire?”

Mientras la mayoría de las tierras donde se puede sembrar continúan estando en manos de unas pocas familias adineradas y corporaciones transnacionales; mientras los cultivos tradicionales, como el maíz y el frijol, sean reemplazados por la palma africana y la caña de azúcar; mientras el sistema de justicia siga protegiendo los intereses de la propiedad privada y no los derechos humanos; mientras el Congreso se niegue a aprobar leyes relacionadas con el desarrollo rural y mientras el gobierno persista en favorecer los desalojos forzados en lugar de un diálogo productivo y significativo, la situación seguirá siendo la misma.

Polochic es un caso emblemático de lo que enfrentan otras comunidades agrarias en Guatemala. De hecho, desde lo ocurrido en Polochic, ha habido otros desalojos violentos en Retalhuleu y Petén con trágicas consecuencias.

La administración saliente del presidente Colom se está preparando para “cerrar su puertas”. Los ministerios e instituciones gubernamentales han parado casi por completo su trabajo. Para los restantes cuatro meses, la mayor parte de los esfuerzos estarán enfocados en la transición al nuevo gobierno que tomará posesión el 14 de enero del 2012.

Mientras tanto, las familias de Polochic y otras comunidades campesinas luchan día a día para encontrar la manera de sobrevivir.

Cómo puede ayudar:

- 1) *Firme la Acción Urgente de GHRC, y exija que el gobierno tome acción.*
- 2) *Convírtase en Amigo del Polochic y haga una donación deducible en sus impuestos; 100% de los fondos irán directamente a los esfuerzos para ayudar a la comunidad, lo cual incluye los costos de transporte de los líderes comunitarios para asistir a las reuniones locales y participar en las próximas audiencias de la Comisión Interamericana.*

GHRC denuncia la política de desalojos forzosos

El 30 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, DC se unió a grupos locales e internacionales en expresar seria preocupación por el patrón de desalojos violentos que ocurren en comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio guatemalteco.

Los desalojos forzados han sido llevados a cabo por fuerzas del Estado con violencia, extrema intimidación y con un patrón de destrucción que hace recordar la política de tierra arrasada del conflicto armado interno. Dejan a la población más pobre y vulnerable de la nación con poco o sin acceso a alimentos, agua potable o albergue. Las peticiones urgentes de las comunidades por asistencia y protección de las amenazas y violencia reciben una respuesta de silencio e indiferencia por autoridades locales y nacionales.

- **A finales de julio, 138 campesinos fueron desalojados de la finca Soledad Cafetal en Retalhuleu por cientos de fuerzas estatales.** Un hombre murió de golpes y por la inhalación de gas lacrimógeno, y las viviendas temporales de las familias fueron quemadas por trabajadores contratados por el dueño de la finca. Las 250 familias quienes habían sembrado en la tierra la habían ocupado por los últimos siete meses después de ser despedidos de sus trabajos y expulsados del terreno por el dueño por no pagar su cuota de renta de la propiedad. Los trabajadores informaron a múltiples agencias gubernamentales que nunca les habían pagado el salario mínimo e pidieron acceso a la tierra para sembrar cultivos de granos básicos hasta que hubieran llegado a un acuerdo con el gobierno para ayudarles a conseguir tierra a un precio alcanzable para la comunidad.
- **En agosto, 300 personas fueron desalojadas a la fuerza de una comunidad en la Sierra del Lacandón, Petén,** después de ser acusados de colaborar con el narcotráfico. La Comisión Internacional de Juristas dijo que el Ministro de Gobernación, Carlos Menocal, ha usado una “generalización ilegal” para justificar el desalojo. Los campesinos han denunciado públicamente que los desalojos son parte de un plan de desarrollo que incluye cuatro

Continúa en la página 12

Desalojos violentos

De la página 11

represas hidroeléctricas, una universidad para el estudio de la biodiversidad, un tren eléctrico e instalaciones mejoradas para el turismo en sitios culturales mayas, que el presidente Colom espera que atraigan a 12 millones de turistas cada año. Colom declaró que para alcanzar el desarrollo del parque, la región necesita ser limpiada de "invasores". La región fue remilitarizada durante el Estado de Sitio en mayo de 2011 para "recuperar" el área del narcotráfico. Mientras tanto, el gobierno prorrogó el contrato de la empresa francesa PERENCO para la extracción de petróleo en tierras parcialmente ubicadas en áreas protegidas fue extendido en julio de 2010. Se espera que el proyecto deje grandes impactos ambientales.

Los desalojos han sido denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una violación de los estándares internacionales y de derechos humanos básicos.

Las entidades a cargo de asegurar el debido proceso y respeto de los derechos humanos a menudo acompañan el proceso del desalojo como observadores mudos de la violencia desarrollándose ante sus ojos.

El Estado es responsable de asegurar los derechos humanos básicos de todos sus ciudadanos, incluyendo derecho a seguridad alimentaria, agua potable, vivienda digna, integridad física y debido proceso de la ley. Desalojos violentos y forzados crean un ambiente de miedo y militarización y no resuelven los conflictos profundos que continúan sobre acceso a la tierra.

Mientras un 2% de la población sigue siendo dueño del 70% de la tierra, así como la gran mayoría de recursos naturales, el conflicto continuará.

GHRC condena la falta de respeto del gobierno de Guatemala por procesos de diálogo y por sus políticas que están dispuestas a sacrificar la vida y el bienestar de hombres, mujeres y niños para defender la propiedad privada, y hace un llamado a poner fin a la política destructiva y violenta de desalojos forzados.

Los Archivos Militares

De la página 5

miembro del personal militar de Guatemala, investigué el archivo digital por más de dos horas.

Contrario a la declaración de la Comisión en Washington, DC, la mayoría de los documentos que vi en el archivo no eran etiquetados como secreto o ultra secreto, sino que eran tesis de ascenso de estudiantes militares. Fue obvio que algunos documentos nunca habían sido reservados, así como notas de prensa y decretos del Congreso. Algunos archivos PDF simplemente no se abrían.

A pesar del mandato de la Comisión, muchos documentos no fueron del periodo 1954-1996. Tomemos, por ejemplo, un documento de 1952 que regula las bandas militares y los grupos de marimba, o una "Guía de planificación" de 2011.

Lo más interesante era que bajo la sección titulada "órdenes, informes y planes", no encontré ni un solo documento. Los cuatro planes militares clave mencionados anteriormente, por supuesto, se mantienen en reserva, a pesar de que pueden ser solicitados por un juez. Algo irónico, ya que por lo menos uno ya está a disposición del público en Internet (véase el sitio web Archivo Nacional de Seguridad para una copia autenticada de *Operación Sofía*).

Cuando le pregunté a mi acompañante militar sobre estas discrepancias, me informó que la Comisión "no ha terminado de digitalizar los documentos" y que la recolección irregular no fue culpa de la Comisión, sino que "sólo tienen lo que se les entregó".

El ejército está en una posición delicada. Tratando de validar el archivo, el gobierno ha promovido el número de documentos desclasificados (¡94.78% son públicos!), busca aumentar las visitas a la sala de lectura y está considerando trasladar el archivo afuera de la base del Estado Mayor. Sin embargo, con un análisis más profundo de los archivos desclasificados, el ejército seguramente se enfrentará con un escrutinio público mayor, y los autores materiales e intelectuales de los extensos y sistemáticos crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas armadas de Guatemala estarán más expuestos a procesos judiciales.

Además, si el contenido del archivo no refleja la totalidad de documentos reservados del ejército, o si los documentos permanecen clasificados, el acceso en sí se convierte en un punto poco importante. La decisión de incluir un gran número de documentos no relacionados con el mandato de la Comisión sólo ha servido para deslegitimar el archivo.

A pesar del mandato de la Comisión, muchos documentos no fueron del periodo 1954-1996. La mayoría de los documentos no eran secreto o ultra secreto. Planes militares claves se mantienen en reserva.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Una revisión del proceso de la Comisión, en particular su acceso a archivos de las bases regionales, será difícil, tanto por razones prácticas como políticas. Ni los militares, ni el liderazgo político actual tiene interés en una auditoría pública de sus acciones. Muchos sospechan que los documentos militares claves ya podrían ser destruidos o cuidadosamente ocultados.

La presión continua será necesaria para que los guatemaltecos tengan acceso verdadero a los archivos militares del conflicto interno.

El Ministerio de Defensa y otras agencias estatales deben iniciar consultas sinceras con expertos guatemaltecos y organizaciones de víctimas, deben solicitar recomendaciones de la sociedad civil y hacer una campaña de concientización al nivel nacional. El número verdadero de documentos designados "secreto" y "ultra secreto" entre 1954-1996 debe ser anunciado al público.

Con el fin de facilitar el acceso a los documentos recientemente desclasificados, el archivo debe ser trasladado a un sitio neutral y ser supervisado por personal civil. Documentos, incluyendo los archivos reservados y parcialmente reservados, deben ser indexados para el récord público. Artículo 24 de la Ley de Libre Acceso a la Información debe ser interpretado en su sentido más amplio a los fines de desclasificar y hacer públicas los planes que institucionalizaron la campaña de tierra arrasada de la década de los 80s.

Romper la impunidad del conflicto interno y lograr que haya justicia será un proceso largo y apenas ha comenzado. Es posible que este archivo sea un primer paso importante hacia una mayor transparencia, pero está claro que el proceso no debe terminar aquí.

Delegación se reúne con mujeres dirigiendo la lucha contra la violencia

La delegación anual de GHRC, enfocada en el tema de la violencia contra la mujer, unió a personas de distintas partes de EEUU y una participante rumana de la Delegación de la UE a Guatemala. Este año, mujeres líderes destacaron la impunidad histórica y actual en casos de violencia sexual y los vínculos entre la violencia contra las mujeres y el conflicto sobre la tierra.

La semana intensa de reuniones y testimonio de mujeres defensoras, activistas y sobrevivientes inició con una presentación inspiradora por Lorena Cabnal, una líderesa comunitaria y activista contra la minería.

El liderazgo de Lorena salió de una búsqueda para definir su identidad como mujer xinca, un proceso difícil que le hizo cuestionar normas de género y estructuras de poder en su comunidad que habían existido por mucho tiempo. A la vez, empezó a apoyar a otras mujeres cuestionar y superar la opresión interna. Ahora con el grupo de mujeres AMIS-MAXAJ está desarrollando un modelo de “feminismo comunitario” para romper con la “victimización eterna” de las mujeres y también del racismo sistémico, patriarcal arraigado y las prácticas capitalistas destructivas.

Para Lorena, la lucha por los derechos de las mujeres es profundamente entrelazada con el respeto por la madre tierra. Ha encabezado la lucha de su comunidad contra la minería en el territorio histórico xinca, lo que internamente se conoce simplemente como “la montaña”.

Depósitos de petróleo fueron descubiertos en la montaña en 2008 y el gobierno guatemalteco, sin consultar con las comunidades xincas, rápidamente otorgó licencias para exploración y extracción. Ya en 2009, Lorena y otros habían organizado a 20.000 en una marcha a la capital. Su activismo, sin embargo, llevó a amenazas de muerte, y ella y su hija han sido desplazadas a la capital.

“La minería está destruyendo al pueblo xinca”, le dijo a la delegación.

Rosa, una mujer q'eqchi' de Lote 8, y víctima de violencia sexual y desalojo forzado, ha vivido esa destrucción en su propia comunidad.

Los delegados viajaron a la comunidad remota de Lote 8, afuera de El Estor, Izabal, para aprender sobre el desalojo violento que sufrieron casi 100 familias en 2007, que se llevó a cabo para abrir terreno para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), un subsidiario de la empresa canadiense HudBay Minerals hasta agosto del 2011.



Delegados de GHRC se reúnen con representantes de ISMU y FUNDAESPRO en la capital.

Llegar a Lote 8 no fue fácil. Después de viajar por dos horas del poblado más cercano, parados en la parte trasera de una camioneta que viajaba sobre terreno escabroso, los delegados llegaron a la ubicación original de la comunidad. De allí hicieron una caminata de dos horas por el bosque y cosechas de cardamomo para llegar al Lote 8 actual.

Durante el desalojo, mujeres en la comunidad fueron violadas en grupo por fuerzas estatales y guardias de seguridad de la CGN. Dos mujeres embarazadas perdieron sus bebés. Rosa ya no puede dar luz. Estas mujeres compartieron su testimonio doloroso con la delegación, pero lo hicieron aparte de los hombres en la comunidad. Ha sido un reto para las mujeres hablar sobre la violencia que sufrieron y al principio temían que sus esposos les culparan a ellas o tomaran represalias en su contra.

Así como en un 98 por ciento de los casos en Guatemala, los hombres responsables por la violencia sexual en Lote 8 andan libres. Rosa, junto con diez mujeres más, ha hecho una denuncia contra HudBay en Canadá con la esperanza de responsabilizar a la empresa por las acciones de sus guardias de seguridad.

La desigualdad de género y la discriminación tienen una larga historia en Guatemala, sin embargo, los actos de violencia brutal que sufren las mujeres hoy en día se generalizaron, e incluso fueron promocionados, durante el conflicto interno armado.

“Hombres fueron enseñados a violar a mujeres de forma sistemática”, explicó Luz Menéndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y desde hace tiempo una activista de derechos de la mujer.

A pesar de más de 9.000 casos (documentados) de violencia sexual durante el conflicto interno, ningún caso ha tenido audiencia en las cortes y nadie ha sido responsabilizado. Los delegados se reunieron con organizaciones trabajando para romper esa impunidad, incluyendo UNAMG, mujeres del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP) y abogadas de la organización Mujeres Transformando el Mundo. Esperan que el primer caso llegue a las cortes en los próximos meses.

Delegados también tuvieron la oportunidad única de reunirse con uno de los grupos más olvidados en Guatemala – las mujeres privadas de libertad. En Puerto Barrios, el grupo visitó una cárcel con 40 mujeres presas, muchas quienes se encuentran lejos de sus familias e hijos. Las mujeres reciben apoyo, talleres y solidaridad del Colectivo Artesano. Compartieron su arte, poemas y música con los delegados en el patio de la cárcel.

De regreso a la Ciudad de Guatemala, el grupo escuchó sobre proyectos de salud pública, educación y de incidencia política que han sido promovidos por dos organizaciones de mujeres en las comunidades marginales alrededor de la capital. Representativas del Instituto para la Superación de la Miseria Urbana (ISMU) y Fundación Esfuerzo y Prosperidad (FUNDAESPRO) hablaron de los retos de mejorar las condiciones de vida en las comunidades y la falta de respuesta del Estado. Mientras presionan por un cambio político, también construyen redes sociales y brindan talleres de alfabetización y educación a cientos de mujeres y jóvenes.

Los testimonios compartidos con la delegación durante la semana reflejaron la lucha amplia de las mujeres para romper con el ciclo histórico de victimización e impunidad, y su liderazgo poderoso al nivel comunitario y nacional.

Ahora que han regresado a los Estados Unidos, participantes ya han empezado a utilizar su experiencia en la delegación, y las voces de las mujeres que conocieron, para concientizar a sus propias comunidades y fortalecer la solidaridad internacional

GHRC dirija una delegación a Guatemala cada agosto. Si usted desea unirse a nosotros en 2012, por favor póngase en contacto con ghrc-usa@ghrc-usa.org.

GHRC abre una oficina en Guatemala, felicita al nuevo personal

En mayo de 2011, GHRC abrió su primera oficina permanente en la ciudad de Guatemala. La oficina coordina con socios guatemaltecos y otras organizaciones internacionales en el país, y supervisa el Programa de Defensores de Derechos Humanos. Este año no sólo aumentemos nuestras actividades de incidencia, sino que también seguiremos prestando apoyo directo a los defensores que necesitan reubicación de emergencia, así como la educación de los hijos de los líderes comunitarios que han sido amenazados o atacados.

Con la expansión de nuestros esfuerzos en Guatemala, también damos la bienvenida a nuevo personal. Director saliente Amanda Martin despide después de tres años de trabajo increíble para construir y fortalecer la organización. Su visión de contar con personal en Guatemala llevó a la contratación de Rob Mercatante, y nos sentimos orgullosos de presentarle como representante de GHRC en Guatemala. Aquí se presenta a sí mismo y su compromiso fuerte con los derechos humanos y la justicia en Guatemala.

Carta de salida de Amanda Martin

Hace tres años, me senté en una cabina de madera en un restaurante en Brookland, en el noreste de Washington, DC, después de haber aceptado el cargo de directora en GHRC. Presidente de la Junta Kathy Ogle me dijo, "una de las cosas mejores de este trabajo es que te encontrarás con tanta gente increíble, inspiradora que están haciendo un trabajo valiente." Sus palabras sonaron verdad una y otra vez, a lo largo de los últimos tres años.

De viajar a Guatemala cada tres meses alimentó mi pasión por el trabajo, mientras que lo que me permite pasar meses en la oficina de GHRC en DC. Viajes a Guatemala me llevó cara a cara con estos líderes de la comunidad increíbles, ya que viajó a las comunidades para escuchar las historias de la resistencia organizada a los mega-proyectos, y escuchó el testimonio de hombres y mujeres acusados de delitos que no cometieron. La información recogida en estos viajes de in-

vestigación de los hechos regresó a los EE.UU., y los partidarios de GHRC, a través de El Quetzal y el correo electrónico masivo.

Organizar y dirigir las delegaciones de los EE.UU. a Guatemala fue con mucho mi mayor alegría en GHRC. La colaboración con los líderes comunitarios, profesores, estudiantes, activistas, trabajadores sociales, y tantas otras personas que se dedican a través de los EE.UU. en los viajes de inmersión de una semana me abrió los ojos a nuevas perspectivas. Muchos de ustedes se han convertido en amigos míos, y uno con el otro, la creación de una nueva parte en una red de solidaridad.

Tenía la intención de permanecer en el GHRC durante tres años, y el tiempo ha llegado a su fin. Trabajar en GHRC ha sido increíblemente gratificante que cambió la vida para mí. Me ha vuelto a conectar con Guatemala, un país y un pueblo que aprendí amar hace 18 años cuando llegué allí la primera vez como voluntario del Cuerpo de Paz. Ahora estoy reconectada y llevo a Guatemala

conmigo dondequiera que voy, en mis pensamientos y trabajo.

Ahora que abro un nuevo capítulo en mi carrera, trabajando por los derechos humanos en Birmania, voy a traer las lecciones, experiencias, y la inspiración del trabajo de GHRC conmigo.

Kelsey Alford-Jones, que trabajó conmigo durante tres años (como Directora Asociada), se ha hecho cargo de directora de GHRC. No hay nadie más que pudiera ocupar este puesto tan a fondo y de manera excelente como Kelsey. Y, ahora está trabajando con Rob Mercatante, que dirige la nueva oficina de GHRC en la Ciudad de Guatemala.

Durante esta transición en GHRC, su continuo apoyo e interés en nuestro trabajo para Guatemala es especialmente importante, e imprescindible, para crear cambios sistémicos positivos.

Con gratitud,
Amanda Martin

Carta de Rob Mercatante

Director del Programa de Defensores de Derechos Humanos

Hay un breve momento de miedo paralizante cuando uno se da cuenta que tiene un escorpión en su ropa interior.

Me quedé inmóvil al sentir el invasor venenoso correr sobre mi trasero. Inmediatamente bajé mi calzoncillo y comencé a bailar... como una versión desnuda de John Travolta en "Saturday Night Fever". (Y se puede apostar que la canción que estaba escuchando en mi cabeza era "Staying Alive").

Rápidamente agarré al machete y con un rápido machetazo despaché al alacrán. Dejé escapar un gran suspiro de alivio.



Rob Mercatante, centro, muestra sus cuadros a los miembros de la comunidad durante la exhumación.

Me acerqué al pizarrón colgado en la pared de mi casa y añadí otra anotación.

Rob: 81, Alacranes: 0.

Ah, la vida en Guatemala.

La primera vez que vine a Guatemala fue como voluntario con Hábitat para la Humanidad. Mi trabajo consistía en ayudar a construir viviendas populares para familias necesitadas de El Rosario, un pequeño pueblo en la costa sur de Guatemala. Los tres años que viví en este pueblo, me sentí como participante en el programa

"Survivor": no hubo electricidad, ni agua potable, ni teléfono... pero sí, ¡un calor tan brutal que la única vez que dejé de sudar fue cuando estuve peligrosamente deshidratado!

Pero no fue sólo el calor ni los escorpiones que hizo la vida en El Rosario tan difícil. Por primera vez en mi vida entendí lo que significa "vivir en pobreza". Vi cómo la

Continúa en la página 15

Carta de Rob M.

De la página 14

pobreza afectó a las vidas de mis vecinos, mis compañeros de trabajo y mis amigos. Vi las condiciones inhumanas de trabajo en los cañaverales que rodearon a nuestro pueblo. Vi al centro de salud sin médico y con medicina echada a perder por falta de refrigeración. Vi a la escuela con pizarras vacías porque los maestros no tenían yeso. Vi a los helicópteros del ejército aterrizar en el campo de fútbol y a los soldados revisar casa por casa, en búsqueda de guerrilleros. Vi a niños morir por enfermedades prevenibles y curables.

Puede parecer extraño, entonces, decir que El Rosario es también donde me enamoré de Guatemala. En medio de la pobreza, en medio del sufrimiento diario, fui testigo de la resistencia y la belleza del espíritu humano. Vi a varias generaciones de una familia viviendo bajo el mismo techo de palma, los abuelos acunando a un bebé recién nacido en la hamaca. Vi a miembros de la comunidad trabajando juntos bajo el sol implacable para ayudar unos a los otros construir sus hogares. Vi momentos de verdadera solidaridad cuando todo el pueblo se reunía para acompañar a una familia que estuvo de luto. Vi la extraordinaria generosidad de las personas más humildes cuando me invitaron a su casa a comer con ellos.

Como extranjero, como hombre blanco de privilegio del mundo “desarrollado”, la bienvenida y la aceptación incondicional que recibí en El Rosario sólo puede ser descrita como un acto de gracia. Esos tres años cambiaron para siempre mi vida y marcaron el inicio de un camino que iba a seguir, con sus giros y vueltas, por más de dos décadas.

En septiembre celebré el año número 22 de haber vivido y trabajado en Guatemala. Durante estos años he sido testigo de momentos de belleza y brutalidad, avances y retrocesos, la esperanza y la desesperación.

He tenido el privilegio de participar en momentos cruciales de la historia reciente de Guatemala así como el retorno de los refugiados de México, la primera visita por tierra a las Comunidades de Población en Resistencia, la entrega del premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, la firma de los Acuerdos de Paz, la transformación de la URNG de una organización guerrillera a un partido político progresista, las exhumaciones forenses de las fosas comunes del conflicto armado y la apertura de los juicios contra los militares responsables de las masacres de la población indígena.

A pesar de todos estos avances, Guatemala sigue enfrentando una serie de retos que parecen ser insuperables: familias que viven en la extrema pobreza, alta vulnerabilidad a los desastres naturales, un gobierno debilitado, una recaudación de impuestos insuficiente, una poderosa oligarquía que da prioridad a las ganancias sobre el progreso de la nación, la presencia de carteles de la droga, el crimen organizado y las pandillas, el nepotismo y la corrupción política, altos índices de impunidad y un sistema judicial apenas funcional, la distribución desigual de la tierra y los desalojos violentos de los campesinos, el éxodo masivo de inmigrantes a los EEUU, la proliferación de los proyectos extranjeros mineros destructivos, la violencia contra las mujeres y el femicidio, el racismo y la discriminación, las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, etcétera.

Ah ... y ¿por qué no mencionarlo?: la alta probabilidad de que el próximo presidente de Guatemala sea un ex general del ejército acusado de tortura, matanzas y otros crímenes de lesa humanidad.

No debería ser una sorpresa que mucha gente cuestionan mi decisión de quedarme en un país tan difícil y peligroso. Putschis, ¡a mí me pregunto lo mismo! He sido acosado por mareros, asaltado y robado a punta de pistola... en repetidas ocasiones. He inhalado gases lacrimógenos, he huido de los disparos de bala, he tenido mi teléfono intervenido, he sido detenido por la policía y he recibido amenazas de muerte.

Pero cuando pienso en todos los increíbles hombres, mujeres y niños guatemaltecos que he conocido, y todas las adversidades terribles que ellos enfrentan día tras día, la pregunta cambia rápidamente de "¿por qué me quedo?" a "¿cómo podría irme?" No es una decisión difícil, después de todo. Ante injusticias tan grandes, y necesidades tan tremendas, todos menos los corazones más duros se inspirarían a trabajar por la paz y la justicia.

Es por eso que ser contratado por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala para abrir su nueva oficina en la Ciudad de Guatemala es, para mí, un sueño hecho realidad.

Mis primeros seis meses con GHRC (dos en Washington, DC y cuatro en Guate) han sido muy emocionantes, exigentes y agotadores. Afortunadamente, incluso en los mo-

mentos más difíciles, es fácil estar inspirado. Después de todo, ¡yo trabajo con los héroes!

Me considero muy afortunado de ser parte del equipo de GHRC. Kelsey, nuestra directora, es una mujer super-talenta: trabajadora, perspicaz y con un profundo conocimiento sobre todas las cosas en Guatemala. Las pasantes de GHRC tienen una amplia selección de habilidades que ellas aportan incansablemente a las tareas actuales. Nuestra junta directiva es muy involucrada y compasiva. Y, a partir de este mes, Kathryn Johnson se une a nuestro personal como la Coordinadora de Incidencia y Gestión en Washington.

A pesar de que soy el único miembro del personal en Guatemala, pocas veces trabajo solo en el país. Hay una red de defensores de derechos humanos aquí que han dedicado sus vidas a la lucha por la justicia social. Algunos son bien conocidos, nacional e internacionalmente. Pero la gran mayoría de estas personas inspiradoras trabajan de bajo perfil, a menudo arriesgando sus vidas en servicio incesante y abnegado a los pobres, los marginados y los oprimidos.

Y luego están ustedes.

Ustedes que han apoyado a GHRC a través de las delegaciones, las campañas de acciones urgentes, donaciones, giras de activistas invitados, o en otras de nuestras actividades. Sin ustedes, ¡nada de este trabajo será posible! Cada vez que asisto a un taller, marcha o protesta, cada vez que reclamo a aquellos en el poder o enfrente a una injusticia, cada vez que acompaño a personas, familias o comunidades en riesgo ... lo hago, no como Rob, pero como la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Hablo con su voz y actúo con su apoyo.

Existe un consenso general de que la situación de los derechos humanos en Guatemala se encuentra en el momento más crítico desde la década de 1980, los años más cruentos del conflicto armado. Los desafíos son enormes. Vidas están en riesgo. Estoy convencido de que sólo trabajando todos juntos podemos hacer prevalecer la justicia y los derechos humanos.

Me siento orgulloso de ser parte de GHRC. Te prometo que nada, ni siquiera los alacranes, me va a impedir de dar mi todo a este trabajo tan importante.

Dos leyendas recordados

Cantante argentino de resistencia asesinado en Guatemala

Facundo Cabral, cantante, compositor argentino, y una voz importante contra las dictaduras militares en Latinoamérica, fue asesinado mientras estaba de gira en Guatemala en julio de este año. Cabral y su representante se dirigían al aeropuerto en la Ciudad de Guatemala cuando fueron emboscados por dos vehículos armados. Aunque todavía se desconoce los verdaderos motivos del ataque, algunos argumentan que el balazo fue dirigido a su promotor, mientras que otros, incluyendo Rigoberta Menchú, han afirmado que Cabral fue asesinado por sus creencias.

En reacción al asesinato, admiradores de todas partes de Guatemala asistieron un concierto conmemorativo y el presidente Álvaro Colom declaró tres días de luto nacional. A principios de agosto, la policía guatemalteca detuvo a un sospechoso en el caso—un sicario con conexiones a grupos de crimen organizado, particularmente a narcotraficantes.

Cabral nació en 1937 en La Plata, Argentina. Fue el octavo hijo de una familia pobre, pero superó sus circunstancias desafortunadas a través de una dedicación profunda a la justicia social y su don musical. Después de una adolescencia dura y una serie de trabajos insignificantes, Cabral comenzó a tocar música en 1959 y lanzó su primera canción exitosa en 1970. A mediados de los años 70s, estaba firmemente establecido en el ámbito musical de América Latina y había ganado una reputación como un cantante de protesta y lucha social.

Debido a sus críticas políticas abiertas, Cabral fue exiliado a México después del golpe de estado argentino en 1976. Sin embargo, seguía escribiendo y tocando, y ganó admiración de una amplia variedad de públicos. Cuando regresó a Argentina



(Foto: <http://iserve-ak.last.fm/serve/232/26046893.jpg>)

en 1984, era aun más popular, ya que producía una mezcla única de palabra, poesía, filosofía y música. En 1996, las Naciones Unidas declaró a Cabral como un "mensajero mundial de paz" por su dedicación constante a la justicia y libertad para el pueblo de Centro- y Suramérica.

Fallece el revolucionario Alfonso Bauer Paíz a los 93 años

El activista político guatemalteco y defensor de derechos humanos, Alfonso Bauer Paíz, cariñosamente conocido como "Poncho", falleció el 10 de julio a los 93 años debido a un fallo cardíaco.

Paíz nació en la Ciudad de Guatemala el 29 de abril de 1918. Se graduó de la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales como abogado y notario público. Después de la revolución de 1944, Paíz trabajó en una serie de cargos políticos en Guatemala. Después del golpe de estado de 1954, Paíz fue exiliado a México hasta que volvió secretamente a Guatemala tres años después y empezó a trabajar como profesor en la Universidad de San Carlos.

Paíz también fue elegido a la comisión que estudió y finalmente denunció las concesiones ilegales de níquel por parte del gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio. Debido a las críticas presentadas por la comisión, el gobierno trató de eliminar a sus miembros. Paíz fue víctima de un ataque armado en 1970 y pasó cinco meses recuperándose en

el hospital. Era el único miembro de la comisión que sobrevivió.

Paíz viajó a Chile en 1971, pero huyó después de que el líder izquierdista, Salvador Allende, fue derrocado en 1973. Vivió en Cuba hasta 1980, apoyando al Ministerio de Justicia. Entre 1981 y 1988 trabajó como asesor del gobierno de la Revolución Sandinista en Nicaragua. En 1988, Paíz regresó a México para trabajar con los refugiados guatemaltecos que habían huido durante el conflicto armado. Luego, regresó a Guatemala en 1995, donde continuó luchando por los derechos del pueblo.

Miguel Ángel Albizu, un activista de derechos humanos y columnista guatemalteco se refirió a Paíz como: "Otro de los grandes defensores de los derechos del pueblo, el inquebrantable Alfonso Bauer



(Foto: www.mimundo-photosays.org)

Paíz, que le ganó batallas a los esbirros y que sirvió humildemente a Guatemala, a Chile, a Cuba y Nicaragua; y, especialmente, a quienes huyendo de la muerte se refugiaron en México para salvar la vida".

Admiradores y dolientes llenaron las calles de Guatemala para recordar y conmemorar uno de los héroes de la nación.

Boletín de derechos humanos

23 de marzo: **Colom y su esposa, Sandra Torres, presentan demanda de divorcio.** Poco después del divorcio, Torres anunció su candidatura para presidente.

18 de abril: **Persiste violencia en Alta Verapaz.** Dos meses después de que se levantó el estado de sitio, hubo un resurgimiento de violencia con 7 homicidios durante dos semanas.

26 de abril: **El aniversario del asesinato de Gerardi.** Se reunieron cientos de personas en la tumba del obispo Juan Gerardi para conmemorar el 13 aniversario de su muerte.

9 de mayo: **Portillo declarado 'no culpable'.** Ex presidente Alfonso Portillo quedó absuelto del blanqueo de US \$15 millones después de una vista tribunal. El Ministerio Público y la CICIG han apelado el fallo.

17 de mayo: **Colom declara estado de sitio en Petén.** Presidente Colom declaró un estado de sitio en el Petén después de la masacre de 27 personas el 15 de mayo, con el intento de restablecer la paz y el estado de derecho en el departamento. La región ha llegado a ser un centro del crimen organizado.

1 de junio: **España autoriza la extradición de Carlos Veilmann.** Se pidió su extradición para que enfrentara los cargos en su contra, que incluyen la ejecución extrajudicial de diez prisioneros entre 2005 y 2006.

3 de junio: **Guatemala celebra la memoria de Jacobo Arbenz Guzman.** Cincuenta y siete años después del golpe de estado que expulsó al Presidente Arbenz, la nación le reconocerá en los currículos escolares.

8 de junio: **Se hacen públicas las finanzas de los partidos.** El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo disponible al público los informes financieros de los partidos, y requirió que los candidatos revelaran sus fuentes de financiamiento.

10 de junio: **Ex jefe de policía detenido.** El ex jefe de la policía nacional, Hector Bol de la Cruz, fue detenido en Guatemala por su participación en la desaparición del estudiante y activista, Edgar Fernando García en 1984.

22-23 de junio: **La Secretaria de Estado, Hilary Clinton, asiste a foro de seguridad.** Clinton asistió a la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, convocada por la Secretaría de Integración Centroamericana (Sica). El objetivo de la conferencia fue coordinar la colaboración entre representantes internacionales, organizaciones e instituciones para formular una estrategia regional coherente.

6 de julio: **Defensores de derechos humanos entregan denuncia con el Relator Especial de las Naciones Unidas.** GHRC, Derechos en Acción y Jennifer Harbury presentaron una carta formal al Relator Especial de las Naciones Unidas, alegando que el Otto Pérez Molina, ahora candidato presidencial en Guatemala, fue involucrado en el uso sistemático de tortura y en actos de genocidio durante el conflicto interno en Guatemala.

13 de julio: **Estados Unidos deporta a ex kaibil.** Pedro Pimentel Ríos—ex kaibil que fue involucrado en la masacre de 1982 en la parcela Dos Erres, Petén—fue deportado de los Estados Unidos después de que no recibió asilo y fue acusado de mentir sobre su involucramiento en abusos de derechos humanos en su petición de ciudadanía. Al llegar, fue entregado a las autoridades guatemaltecas.

2 de agosto: **El Senado confirme nuevo embajador a Guatemala.** Presidente Obama nombró a Arnold Chacón como el nuevo embajador a Guatemala. Chacón tiene treinta años de experiencia trabajando con el Cuerpo Diplomático en Ecuador, Perú, Chile, México y Honduras. Ha declarado que los derechos humanos serán una de sus prioridades más importantes.

3 de agosto: **Ex kaibiles sentenciados por la masacre de Dos Erres.** Daniel Martínez Méndez, Manuel Pop Zun, Carlos Antonio Carias López y Reyes Collin Gualip fueron condenados a 6 mil 60 años por los 201 asesinatos que cometieron.

24 de agosto: **El embajador de EE.UU., Stephen McFarland, se despide de Guatemala.** McFarland ha terminado su estancia en el país y seguirá su carrera diplomática en Afganistán. Empezó su trabajo en Guatemala hace 11 años y ha sido aplaudido por su dedicación a los dere-

chos humanos.

30 de agosto: **EE.UU. reconoce graves violaciones por experimentos médicos.** La Comisión Presidencial para el Estudio de Temas Bioéticas de Estados Unidos condenó un estudio realizado en Guatemala por médicos estadounidenses entre 1946 y 1948, en el cual cientos de sujetos guatemaltecos incluidos prisioneros y trabajadoras sexuales fueron infectados con sífilis y gonorrea. La Comisión declaró que los investigadores y doctores tienen una responsabilidad moral por los abusos. Recomendará compensación para las víctimas en su próximo informe.

31 de agosto: **Dos mujeres sentenciadas por facilitar adopciones ilegales.** Se inició el juicio contra Alma Beatriz Valle Flores de Mejía y Enriqueta Francisca Noriega Cano, sindicadas de los delitos de asociación ilícita, uso de documentos falsos, trata de personas, adopción ilegal, y de conformar una estructura de adopciones ilegales en el país. Se alega que las robaron a una niña, Anyeli Liseth Hernández Rodríguez, y le entregaron ilegalmente a una pareja en los Estados Unidos.

15 de septiembre: **Prorrogan estado de sitio por 30 días.** El presidente Álvaro Colom informó que el estado de sitio en Petén fue ampliado por 30 días con el objetivo de restringir la portación de armas y concluir las investigaciones tras la masacre el pasado 15 de mayo. Se extendió por primera vez el 16 de junio.

19 de septiembre: **Irregularidades y manifestaciones siguen después de las elecciones.** Acción Ciudadana presentó 165 denuncias de irregularidades en los procedimientos de las elecciones, incluyendo disturbios de orden y la compra de votos. Algunos de los denuncios incluyen evidencia de intimidación de votantes. Miles de personas en al menos 40 municipios exigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que repitiera las elecciones locales.

24 de septiembre: **Guatemala reitera su solicitud para TPS.** El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la petición que viene durante otro año de desastres naturales trágicos. La primera petición fue enviada en junio del 2010 después de la tormenta Agatha que causó inundaciones, desalojamiento y daño infraestructural.

Donantes de GHRC FY10/11

A.J. Schumacher * Abbey of Holy Trinity * Abbey of Our Lady of the Holy Trinity * Alan D. Hutchinson * Alaskans Concerned about Latin America * Albert N. Demott * Alexander Dupuy * Alexandra Roth * Alice D. Rosenfeld * Alison Davis * Allen C. Ladd, P.C. * Alyssa Piccirilli * Amy Austin * Amy Beth * Amy Kunz * Anavela Mijangos & Karl Glasener * Andrea Versenyi * Andrew Petonak * Ann and David Loretan * Ann Unatin * Anne Sayre * Annella J. Auer * Anonymous Donors * Anthony Foxen * Ava Nelson Zandi * Barbara and Alan Krause * **Barbara and Philip Brandhuber** * Barbara Judge * Barbara Parsons * **Barbara Rogoff** * Barrie Ryan * Benedictine Foundation Vermont * Bernard Dansart * Bonnie Sommers * Brenda L. Metzler * Brenda Merida-Manzardo * Brian J. Stefan-Szittai * Bruce and P. Hirsch * Bruce Cohen * Bruce J. Calder * Candace Odiorne * Carol Brandel * Carol Kaplan * Carol L. Reinsberg * Carol Newman * Caroline L. Everts * Cathy Mirabile * Charles Askins * Cheryl Wilfong * Choate, Hall and Stewart LLP * Cindy Boland * Claire L. Evans * * Claire Molner * **Connie Newton** * D and M Faulkner * Dagmar Hoxsie * Dale Sorenson * David and Diane Perkinson * David Holiday * David Leroy Winkler * David Rorick * David W. Palmer * Debra Delavan * Debra Riklan Vekstein * Diana and Christopher Carson * Diane M. Nelson * Donald Sibley * Dorothy Walker * Douglas and Carol Wingeier Trust * Dr. Burritt S. Lacy, Jr. * E.L. and C.S. Kelly * Edward and Joyce Wright * Edward Corwin * Eileen Carney * Eileen Goodwin * **Einheuser and Nakisher PLLC** * Elaine Goldman * Elaine K. Martinez * Elaine Kihara simone * Ellen K. Radday * Evan M. Fales * F.C. Siebold, * FR Joseph Mulcrone * Fran-Lynn E. Houston * Gail Lebow **Cozette** * Gene and Harriet Gilson * Gerald Kohler * **Glo-land** * Grace Brinker * Gregg Beerline * Harriet I Hayes * hardt * Hilda M. Wilcox * Irma Mowrey * Jackie DeCarlo * gel and Jeanne Berwick * Gail Britanik * James W. Joel Weisberg * Janett Forte * **Jeffrey Ojemann & Karen Selboe** * Jennifer H. Slusser * Jennifer Giunta * Jessica Mott and Keith Oberg * Jo Ann Scott * Joan B. Croc Institute * Jody Slocum and Kurt Buetow * Joe Shields and Mary Vercheck * John and Christine Sutton * John and Kristine Leary * John and Mary Lou Winder * John Bohman and Luise Van Horne * John Dunker and Amy Paige * John Murray * John R. Prybot * John T. Schmitt * Jonathan Eric Pearson * Joseph and Janice Miano * JP Morgan Chase Foundation * Judith A. Bohler * Judith Brady * Just Give (anonymous "in the name of Bethany Palmer") * Just Give * K and C Johnson * K. I. McLoughlin * Karen Buck, Scott Gilbert * Karen and Thomas Schiller * Karen Rotabi * Kate F. Todd * Katherine and Charles Pang * Katherine E. Kasten * Kathleen Kenney and David Depp * Kathleen Klare * Kathleen McNeely * Kathryn Taylor * Kathy Ogle * Kay Berkson and Sidney Hollander * Kristen Weinman * L. and B. Strieb * L. William and Virginia Corzine * Lance Eric Laver * Laura J. Rampe * Lauri Rose Tanner * Law Offices of Alan Hutchison * Lawrence Krantz * Lee Ann Ward and H. Lawrence Lack * Leonor Blum * Liisa Lukkari North * Lisa Haugaard and Joseph Kirchner * Louise Van Horne * Luise and Hermann Engelhardt * Lynn Shoemaker * Lynn Yellott * M P Rehm * M. Brinton Lykes * Malcome H. Bell * Margaret and Arnold Matlin * Margaret and John Oliver * Margaret B. Bocek * Margaret Morton * Margaret Robinson and Jeanne Gallo * Marilyn Moors * Marjorie Van Cleef * Mark Hathaway and Priscilla Johnson * Marta Sylvia del Rio * Martha Pierce * Martin and Virginia Davis * Martin Mellett and Judith Walsh-Mellett * **Mary and Nicholas Eoloff** * Mary and Patrick Ahern * Mary Ann Litwiller * Mary B. Rein * Mary E. Coenen * Mary Jean Schmelzer * Mary O. Naftzger * Mary Rose Curtis * **Maryknoll Fathers and Brothers** * Matthew McGuire * Meredith Larson and Alex A. Taylor * Michael and Pamela Orbach * Michael Martel * Michael Shimkin * Michael Weddle and Sandra Rowland * Michelle Prentice-Leslie and Mark Gregory * Mike Jenkins * Miriam Spencer * Nadine Meyer, SSND * Nancy L. Ashley * Nancy Tsou * Nastasha Everheart * Natalie Rendingast * Norma Bechtel Hummerstone * Our Lady Queen of Peace Church * Owen D. Owens * **Pat Davis** * Patricia Goudvis * Patrick Bonner * Patrick Kole * Peace Development Fund, Babson Fund * Phil and Julie Carroll * **Philip and Barbara Brandhuber** * Philip E. Wheaton * Phyllis Duffy and

¡Gracias!

Su generosidad

hace posible

nuestro trabajo.

and David Sweet * Elizabeth De-Emily R Stashower * Erik Lang * Jr. * Fayette Krause * Fiona Knox ces Taylor * G. Harrison and * Garrett D. Brown * **Gary** Badesheim * George and Grace ria Bletter * **Gloria Jean Gar-** and Marian Forte * Gretchen Henry Cody * Hermann Engel-Schwartz Rev Trust * J. Diane Jacqueline Freeman * James De-James Loucky * James Ruck and Schmitt * Janet Watchman and Jeannette Breunig * Jeff Maguire

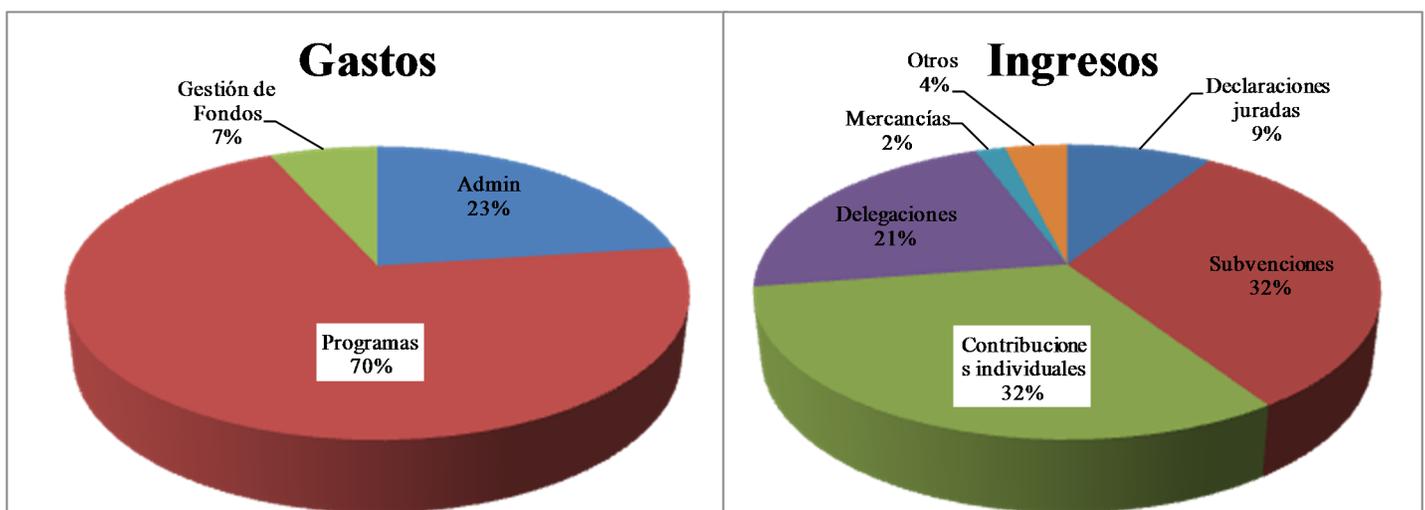
Donantes de GHRC FY10/11

Martha Bowen * Public Welfare Foundation * R. Levin * Rachel DeGolia * Rael Nidess * Randall Shea * Raymond and Vivienne Kell * Rebecca Mills * Rebecca Van Horn * Renata Eustis * Richard and Betty Fridena * Richard and Audrey Vincent * Richard and Joan Clinch * Richard and Margaret Weaver * Richard Broderick * Richard and Lucy Henighan * Richard Vanden Heuvel * Robert and Betty Brown * Robert and Carla Horwitz * Robert and Dorothea Brayden * Robert and Dorothy Lockhart * Robert and Joycelyn Johnson * Robert and Kathryn Bachmann * Robert Denniston * Robert E. Hinshaw * **Robert Larson** * Robert Roth * Robert Textor * Roberta R Palen * Robin Hood and John Cavanagh * Roger Waha * Ron Castaldi * Ronald and Shari Coburn * Ronald Wilhelm * Ross and Gloria Kinsler * Roy Bourgeois * Royce B. Murray * Rudolph L. Nelson * Sally Allen Lunin and Robert Krzewinski * Sara Bartel * School Sisters of Notre Dame * **Severino Perez and Kathleen Studer** * Sheila A. Brady * Sheila H Schultz, Trustee * Sheila Schultz * Sherna Gluck * Simon Klein and Lenore Feigenbaum * Sister of Charity * Sisters of Charity, B.V.M. * Sr. Therese Ann Zanmiller * Steven and Martha Hillyard * **Steven Metalitz and Kit Gage** * Susan Randall * Susanne Jonas * Suzanne Miller * Tanya Kramer * Teresa Keller * The West Farm Account * Thomas and Darlene White * Thomas Bird * Thomas Brown * Thomas Murphy and Ellen Garrity * Timothy and Marilu MacCarthy * Tom Clements * Unitarian Universalist Church, Arlington * Ursula Hill * Vera and William Kelly * Victoria Steinitz * Vincent and Catherine Gallagher * Vivian B. Harvey * Walter Sherwood * Wayne Alt * Whiting-Arnold Foundation * William and Jane Lotter * William and Lorraine D'Antonio * William D. Arvidson * William Davis * William Donnelly * William G. Schomp * William Garner * William J. Reilly * William Russell * **William Wardlaw and Patricia Arnold** * Wizard Window Washing

Queremos dar un agradecimiento especial a las siguientes organizaciones y donantes por su aporte:

Osprey Foundation, Sisters of St. Dominic/Racine Dominican Mission Fund, Eighth Day Faith Community, St. Margaret's Church, SSND Gospel Fund, John y Kathryn Greenberg

Resumen financiero FY10/11



¡Apoya a los Derechos Humanos en Guatemala!
Haga una contribución para apoyar a nuestra nueva oficina en la ciudad de Guatemala y la expansión de nuestro Programa de Defensores de Derechos Humanos.



Guatemala Human Rights Commission/USA

3321 12th Street NE
Washington, DC 20017
Tel: (202) 529-6599
Fax: (202)526-4611
www.ghrc-usa.org

NONPROFIT ORG
US POSTAGE PAID
WASHINGTON, DC
Permit NO. 469

Return Service Requested



El Quetzal

Una publicación trimestral

- ⇒ **Las elecciones en Guatemala**
- ⇒ **El conflicto de tierras y desalojos violentos**
- ⇒ **Cambios interesantes en GHRC**